



La agonía de El salvador y las políticas de los Estados Unidos

JAMES L. CONNOR.

RESUMEN

Testigo presencial de los acontecimientos acaecidos durante el funeral de monseñor Romero, el autor del presente artículo, presidente de La Conferencia Jesuita en Washington, EE.UU., cuestiona seriamente las políticas del Departamento de Estado hacia El Salvador y en particular, la ayuda militar que el gobierno estadounidense le brinda a la actual junta cívico militar gobernante.

La posición oficial del Gobierno de los Estados Unidos hacia El Salvador está muy mal dirigida. De eso estoy ahora convencido. Antes del 30 de marzo no hubiera dicho esto con tanta confianza. Pero ese día obtuve una perspectiva fresca sobre la cuestión cuando me hacinaba en el interior de la Catedral de San Salvador con 4,000 campesinos aterrorizados, mientras estallaban bombas y silbaban balas en la plaza donde nos habíamos congregado para celebrar el funeral del Arzobispo Oscar Romero.

Permitanme, sin embargo, retroceder un poco y contar la historia tal como se desarrollo.

Mi interés por la situación en El Salvador se remonta a la primavera de 1977 cuando el Padre César Jerez, provincial superior de los Jesuitas de Centro América, una región que incluye El Salvador, pasó por Washington. Nos ofreció un panorama general sobre lo que ocurría en su país a algunos de sus compañeros jesuitas y a otras personas del área de Washington. De hecho, se dirigía hacia El Salvador después de haber estado en Roma. Había ido, junto con el Arzobispo Ro-

mero, a explicarle al secretariado de Estado del Vaticano, por qué se habían manifestado en contra del proceso eleccionario y al subsecuente comportamiento del recién electo Presidente Carlos Humberto Romero.

En forma breve, el Padre Jerez describió la opresión del campesinado desposeído y de líderes religiosos a manos de grupos para-militares de derecha que, aparentemente, gozaban de la tolerancia, si no del apoyo, del Gobierno. Más aún, explicó detrás del gobierno se encontraba la "oligarquía", las 14 acaudaladas familias que controlaban la mayor parte de la tierra en este país eminentemente agrícola. Junto con unas 200 familias satélites, las 14 ostentaban casi con toda la riqueza y el poder de El Salvador, mientras que la vasta mayoría de los 4.5 millones de habitantes luchaban por sobrevivir en base a trabajo estacional, si no es que se encontraban totalmente desempleados. Estos campesinos viven en una pobreza total; son, en su mayoría, analfabetas; no tienen ninguna voz en el proceso electoral y experimentan constantes amenazas y opresión.

Esta situación llevó al Arzobispo Romero y a los jesuitas, junto con muchos otros religiosos y miembros del clero, a simpatizar con la causa de los pobres. Sin que ésto pueda causar sorpresa en el contexto salvadoreño, a los sacerdotes se les acusó, cada vez con más frecuencia, de ser marxistas y de instigar revoluciones. Con el tiempo, el nuncio papal reportó las acusaciones de los grandes terratenientes a la Santa Sede. Fue entonces que el Vaticano decidió llamar al Arzobispo y al Padre Jerez a Roma para explicar la situación. Aparentemente, la explicación del arzobispo fue satisfactoria para el Vaticano pues continuó en su puesto.

“¿Hay algo que nosotros podamos hacer aquí en los Estados Unidos?” le pregunté al Provincial cuando terminó su explicación. “Ahora no”, respondió, “pero les dejaré saber si hay algo en el futuro”. Poco después, en junio del mismo año de 1977, había algo que sí podíamos hacer.

Para ese tiempo, un grupo para-militar ultraderechista que se autodenominaba Unión Guerrera Blanca, anunció públicamente que, si después del 20 de julio, quedaba algún jesuita en el país, sería ajusticiado en el acto. Desde nuestras oficinas nacionales en Washington, en las semanas siguientes hicimos lo posible porque la opinión pública norteamericana presionara al Gobierno salvadoreño a que denunciara esta amenaza y ofreciera protección a los jesuitas en el ejercicio de su misión. Estos esfuerzos incluyeron una visita por parte de una delegación de líderes de las Iglesias Católica y Protestante al Secretario de Estado, Cyrus Vance, y un testimonio ante el Congreso, que reabrió sus audiencias a raíz de la violación de los derechos humanos en El Salvador. Al final, el plazo impuesto para el asesinato pasó sin ningún incidente, mientras que el Gobierno apostaba guardias por un tiempo cerca de las residencias de varios jesuitas.

Hacia el otoño de 1979, las noticias provenientes de El Salvador parecían alentadoras. El régimen del Presidente Romero había sido sustituido por una Junta compuesta por representantes que iban desde la derecha moderada hasta la izquierda moderada del espectro político salvadoreño. Con el tiempo, la composición de la Junta cambió y finalmente los planes para una reforma agraria y bancaria fueron presentados. Las reformas, se dijo estaban apoyadas por el gobierno de EE.UU.

Se declaró que la posición oficial norteamer-

icana era de apoyo a la Junta, reconociéndola como una fuerza estabilizadora en El Salvador que podría salvaguardar al país de la dominación totalitaria de los extremistas de izquierda o de derecha. Basado en esto, los Estados Unidos se prepararon para brindarle a este gobierno millones de dólares en ayuda económica y militar. Para un extranjero, todo esto sonaba razonable y alentador.

Entonces leí un artículo de Christopher Dickey en el Washington Post del 19 de febrero de 1980. “El Arzobispo Católico de San Salvador, una de las voces políticas más potentes de esta nación violentamente dividida, advirtió al Presidente Carter que cualquier interferencia de EE.UU. o externa en los asuntos de El Salvador conduciría a un mayor baño de sangre en este país largamente sufrido. El arzobispo se refería a noticias de que los Estados Unidos planeaban mandar hasta 7 millones de dólares en equipo militar así como asesores militares para que ayudaran a las fuerzas armadas de El Salvador y a la tambaleante Junta civico-militar”.

El arzobispo proseguía diciendo: “En vez de favorecer una mayor justicia y paz en El Salvador, la contribución de vuestro gobierno sin duda agudizará aún más la represión. Las fuerzas de seguridad, con una mejor protección personal y con mayor efectividad, han reprimido al pueblo aún más violentamente, usando armas mortíferas. (Un informe de la comisión local de derechos humanos, listaba 194 muertes debido a la violencia política entre el 22 de enero y el 8 de febrero). Es evidente que la Junta y los Demócrata Cristianos no gobiernan el país, sino que el poder político está en manos de militares inescrupulosos quienes únicamente saben como reprimir al pueblo en favor de los intereses de la oligarquía salvadoreña”.

Al día siguiente, el 20 de febrero, le escribí una carta al presidente Jimmy Carter y al Secretario de Estado Cyrus Vance en la cual apoyaba la demanda del Arzobispo. “Hasta que quede claro” le escribí al presidente Carter, “que el gobierno de El Salvador tiene la capacidad y voluntad de usar la asistencia de EE.UU. en favor del pueblo, de los pobres especialmente, espero que acepte la urgente demanda del Arzobispo Romero de no mandar armas. Su demanda es consistente con nuestra tradición nacional concerniente a los derechos humanos”.

Al día siguiente le escribí al Dr. Niall McDermott de la Comisión Internacional de Juris-



tas y a Edmundo Vargas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidiéndole a cada uno que iniciará una nueva investigación sobre las condiciones en El Salvador. Como un gesto de solidaridad, le envíe copia de estas cartas a Monseñor Romero.

Una rápida respuesta de agradecimiento por parte de Monseñor Romero, fechada una semana después incluía la siguiente nota: "De acuerdo a las noticias que aparecen en los periódicos de hoy, parece que la ayuda anunciada por vuestro país ha empezado a ser efectiva con un préstamo inicial a dos instituciones gubernamentales. Ante los ojos de nuestro pueblo parece que el pedido hecho en mi carta no fue tomado en cuenta".

"Por otro lado" escribía Monseñor, "la represión militar crece más intensamente cada día en un intento de cancelar todos los esfuerzos que puedan ser hechos hacia una solución pacífica. Espero en Dios que nuestra voz que clama desde el desierto sea oída por los cristianos que apoyan el respeto de los derechos humanos en vuestro país y que se haga sentir para impedir un baño de sangre aún mayor al que estamos siendo testigos de su cruel comienzo". Concluida con las siguientes palabras: "Espero que la fe que nos une con Cristo nuestro Señor, nos sirva con renovado vigor para ser, aún más, efectivos constructores de su Reino de paz, justicia y amor".

En este mismo período, una carta de Hodding Carter, del departamento de Estado, me aseguraba que pronto recibiría una explicación plena sobre la posición oficial de EE.UU. La explicación llegó con una carta de Richard C. Brown, director en funciones de la Oficina para Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado.

La carta justificaba la determinación de EE.UU. de ayudar a la Junta civico-militar en El Salvador con los siguientes argumentos: "El fracaso del actual gobierno existente en El Salvador casi por seguro incrementaría el peligro de que el país caiga bajo el control de grupos extremistas de la derecha o de la izquierda. En esta coyuntura, la alternativa al actual gobierno sería un gobierno militar aliado con los conservadores o una coalición de izquierda la cual probablemente sea dominada por grupos bien entrenados de la extrema izquierda quienes son hostiles contra los Estados Unidos y los cuales darían una solución marxista a los problemas nacionales, dadas estas alternativas, la política de apoyo de EE.UU. a la reformista y moderada Junta civico-militar parece ofrecer la mejor oportunidad para una solución no-extremista que traerá más justicia a El Salvador".

El Sr. Brown concluía diciendo: "Compartimos plenamente, la preocupación de la Iglesia sobre la violencia y represión en El Salvador. De

hecho mucha de la violencia actual es generada por los extremistas de izquierda y de derecha quienes buscan derrocar al gobierno actual, minar el programa de reformas e imponer sus propias soluciones autoritarias a los problemas nacionales”.

El correo del lunes, 24 de marzo, me trajo la última carta de Monseñor Romero. Me volvía a agradecer mi apoyo: “Esta manifestación fraternal de solidaridad nos ayuda para profundizar aún más nuestra conciencia humana y cristiana para la plena realización de la defensa y la preservación del derecho inalienable del ser humano de acuerdo a la dignidad de cada uno como persona y como hijo de Dios”. Esa misma tarde recibía un mensaje telefónico desde El Salvador informándome sobre el asesinato de Monseñor.

Horas más tarde, ese mismo día hable con un oficial del Departamento de Estado que había visitado El Salvador durante los últimos meses. Me habló sobre varios encuentros que había tenido con el arzobispo y expresó su profundo pesar sobre el asesinato. Aunque, agregó, uno debe reconocer que, de alguna forma, “el arzobispo se lo había buscado” por haber tomado una postura partidaria con la izquierda y por incitar al pueblo hablando de revolución. Después de todo, agregó, la Iglesia debería jugar un papel moderador, calmante y de acercamiento. Manifestó que esperaba que éste fuera el caso en el futuro.

Con esa nota, reservé mi vuelo a San Salvador para el sábado siguiente a fin de asistir a los funerales de Monseñor Romero como representante de los Jesuitas Americanos, en un gesto de solidaridad con nuestros hermanos jesuitas centroamericanos y como respeto al coraje del asesinado arzobispo.

Las ceremonias fúnebres empezaron calmadamente en un bello, aunque caluroso, día. Una procesión de como 30 arzobispos (de Inglaterra, Irlanda, España, Canadá, México, Brazil, Ecuador, Perú, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Costa Rica y los EE.UU.) y más de 200 sacerdotes hacían su recorrido a través de 8 a diez cuadras de la ciudad, desde la Iglesia donde había sido velado hasta Catedral. Centenares de personas se encontraban a los lados, muchos oyendo una transmisión del evento por radio. Se nos había asegurado que ese día sería pacífico y sin ningún “evento”. El Frente Popular, incluyendo a la extrema izquierda, había convenido en observar la no-violencia en honor al arzobispo, y parecía inimaginable que la derecha de línea dura irrespetara el momento a menos que fuera provocada.

En un principio, todo sucedió como prometido. Los arzobispos y el clero entraron a Catedral por una puerta lateral, se dirigieron a la puerta principal para saludar el altar que se encontraba en el frente de Catedral y luego se diri-



gieron a sus lugares asignados. El clero permaneció adentro, detrás de la puerta principal, mientras que los obispos permanecieron afuera, en la plataforma que servía de altar y frente al parque. Toda la plaza era un mar de más de 100,000 personas, mientras que otros miles se regaban por las calles aledañas.

Todo sucedía pacíficamente durante la sucesión de rezos, lecturas e himnos hasta el momento en que, en su homilía, el Cardenal Ernesto Corripio Ahumada de México, delegado personal del Papa Juan Pablo II, empezó a elogiar a Monseñor Romero como un hombre de paz y enemigo de la violencia. De repente una bomba explotó en uno de los extremos de la plaza, aparentemente en frente del Palacio Nacional, un edificio gubernamental. En seguida, balazos, claros y agudos, que hacían eco en las paredes circundantes de la plaza. Al principio, la súplica del cardenal para que todos permanecieran calmos tuvo su impacto. Pero cuando explotó otra bomba, el pánico se apoderó de la masa, que rompió filas y corrió. Unos corrían para las calles vecinas, pero miles corrieron hacia las escalinatas y forzaron su entrada a la Catedral.

Como uno de los sacerdotes que concelebraban, yo me encontraba adentro desde el comienzo. Ahora, veía a la masa aterrorizada que se empujaba por las puertas hasta que la última pulgada de espacio se llenó. Viendo a mi alrededor, me di cuenta que, fuera de las monjas, sacerdotes y obispos, los que participaban en el funeral eran los pobres e indefensos de El Salvador. Ausentes se encontraban los representantes del gobierno de la nación o de otros países. La ceremonia había empezado a las 11. a.m. y ya era entrada la tarde. Durante una hora y media o dos, nos encontramos apretujados dentro de Catedral, algunos se acurrucaban en las bancas, otros se abrazaban atemorizados, otros rezaban silenciosamente o en voz alta.

Las explosiones de bombas se hicieron más cercanas y más frecuentes hasta que la Catedral empezó a temblar. ¿Se vendría abajo todo el edificio? ¿Aparecería un hombre con ametralladora en alguna puerta para masacrar a la multitud? Una niña campesina, de aproximadamente 12 años llamada Reina, vestida con un vestido café y blanco especial de domingo, me abrazó en desesperación y exclamó: "Padre, téngame".

Vivimos a través del horror de las bombas, las balas y el pánico —ahora los cuerpos sin vida eran traídos a la Catedral desde fuera— por

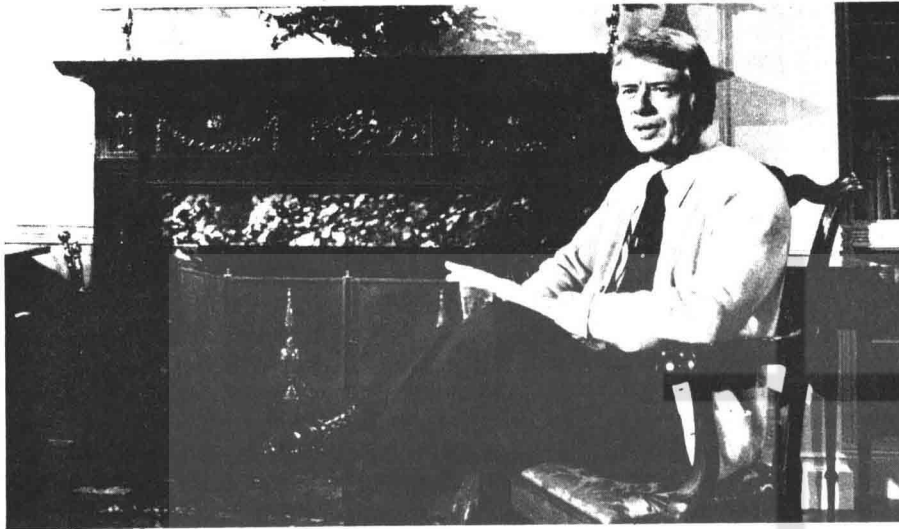
aproximadamente dos horas. Durante ciertos momentos uno no podía dejar de pensar si no seríamos todos asesinados. Al mismo tiempo, yo me empezaba a preguntar, "¿Qué pasa aquí?" ¿Qué es lo que esta experiencia me esta diciendo sobre el debate entre Monseñor Romero y el Departamento de Estado de EE.UU.?"

Eventualmente, las bombas y el tiroteo cesaron. El nuncio Papal ante El Salvador recibió garantías por teléfono de alguna fuente gubernamental que había seguridad para que la gente pudiera abandonar Catedral. Gradualmente, nos enfilamos hacia la calle, con las manos en alto sobre nuestras cabezas, de acuerdo a las instrucciones, para asegurarle a cualquier franco tirador potencial que estábamos desarmados.

Más tarde, de vuelta a la residencia de los Jesuitas, donde me encontraba hospedado, escuchamos por radio, el recuento oficial del gobierno sobre los incidentes. Todo el asunto, explicaba el comunicado, fue obra de los terroristas de izquierda. Nuestra propia experiencia nos había dado por supuesto, un panorama diferente.

La reacción a la postura oficial fue la misma en una conferencia convocada para las 5 de la tarde en un seminario local. Los obispos y otros líderes de la Iglesia que estaban de visita y que habían asistido al funeral fueron abordados para que dieran su información sobre lo que habían visto y como entendían todo el asunto. La conclusión general de la discusión era una contradicción directa a la interpretación oficial del gobierno sobre los acontecimientos. Los testigos se apegaron a sus informes sobre que la primera bomba había provenido del Palacio Nacional, un edificio colindante con la plaza y al cual únicamente se tiene acceso "oficial". La gente había visto disparos provenientes desde el Palacio Nacional hacia los izquierdistas, y no por ellos. Todos sabíamos muy bien que no habíamos sido hechos cautivos en Catedral por terroristas izquierdistas, como la versión oficial decía, ni ningún intento fue hecho por parte de los izquierdistas para secuestrar el cadáver del arzobispo. En otras palabras, la información difundida por el gobierno salvadoreño, era simplemente una fabricación. Un comunicado al respecto fue firmado por 22 representantes de la Iglesia, incluyéndome a mí, los cuales se encontraban presentes en el funeral y sus secuelas.

Por encima de estas cuestiones de hechos, hay una serie de preguntas inquietantes cuando



uno trataba de ahondar en la lógica del intento de interpretación del Gobierno: ¿Por qué le había tomado a la milicia, algunos de ellos estacionados a pocas cuadras, tanto tiempo en llegar a una escena de estallido de bombas y balazos? ¿Quién sería el mayor favorecido de ver a gente común y al clérigo aterrorizado?

Al día siguiente, en mi viaje de regreso desde San Salvador, empecé a juntar como rompecabeza todos los pedazos y piezas de lo que había escuchado y oído acerca de El Salvador durante los últimos tres años, así como lo vivido durante ese trágico fin de semana. En cierto sentido, era una opción entre Monseñor Romero y el Departamento de Estado de EE.UU.

Mis conclusiones van en esta línea: en El Salvador, los gobiernos vienen y se van. Ya sea una dictadura militar o una junta cívico-militar, la forma es de poca consecuencia porque el verdadero poder detrás del trono sigue siendo el mismo. Son los ricos oligarcas quienes consistentemente controlan el gobierno, a la fuerza policial, al poder judicial, a los medios de comunicación y —con menor y limitado éxito, como lo muestran los acontecimientos— a la Iglesia.

Después de esta historia, es fácil de comprender por qué la oligarquía ha rechazado violentamente las demandas campesinas a una reforma agraria, a la organización política, a una democracia participativa, a una libertad de propiedad y de asociación, a educación, a vivienda y un ingreso justo. Estas movidas coartarían su base de poder ya que reestructurarían la sociedad que en cierta manera, parece un 1980 vuelto al feudalismo.

De hecho, sin embargo, estas medidas de reforma son las que los pobres de El Salvador han empezado a reconocer como su derecho en una sociedad justa. Junto con una mayor consciencia que los medios de comunicación han traído sobre la brecha entre su desesperante pobreza y la riqueza de unas pocas familias, ha venido también un nuevo sentido de sus derechos como seres humanos y a su dignidad dada por Dios. Y esta segunda conscientización ha provenido de la exposición del mensaje del Evangelio, por medio de las enseñanzas de los sacerdotes, monjas y catequistas seculares quienes han sustraído bastante de los documentos del Vaticano II y de los pronunciamientos magisteriales asociados con las conferencias episcopales de Medellín y de Puebla. Paso a paso, en la lectura de las Buenas Noticias, los pobres han sido guiados a través de un análisis de su situación socio-política a reconocer las fuerzas que injustamente afectan sus vidas. A pesar de los cargos de ser marxistas, hacen un llamado a la retribución.

La respuesta de los verdaderos poderosos en El Salvador continúa siendo una serie de gestos vacíos hacia la reforma a través de gobiernos títeres (hechos en su mayoría, uno sospecha, para tranquilizar las sensibilidades de los EE.UU. y para asegurarse una mayor ayuda continúa por parte de los EE.UU.) y un mayor incremento en la brutal represión e intimidación de los pobres por medio de la tortura, el asesinato, actos terroristas encaminados a extirpar de todo corazón cualquier anhelo por los derechos humanos.

El análisis social, según ellos, depende básicamente

camente desde que punto se parte: desde dónde y con quién se observa la situación social. Cuando me encontraba acurrucado en la Catedral de San Salvador junto a miles de campesinos horrorizados, me encontré observando la situación social salvadoreña con los humildes y desde su perspectiva de debilidad, terror y opresión. Me fue dada una experiencia vívida del poder del mal que puede permear las instituciones y el comportamiento de aquéllos que luchan por mantener un sistema injusto. Esta experiencia me ha servido enormemente para agudizar y poner en orden una serie de pedazos dispersos.

El gobierno de EE.UU. sostiene que el apoyo a la actual junta en El Salvador es el mejor garante de la paz (¿cuál paz?) y estabilidad (otra vez, ¿de quién?) mientras que yo sé que el apoyar al gobierno militarmente es, en efecto, apoyar la dominación y la agresión de la oligarquía; es mantener la violencia institucionalizada. Por lo tanto, no estamos garantizando la paz, pero sí la continuación de una guerra silenciosa de una élite contra el campesinado y la cual tiene un saldo

de más de 900 muertos en los últimos 90 días. Inclusive, si no hubiera el baño de sangre actual, estaríamos negándole efectivamente el acceso a los elementales derechos humanos a millones de campesinos, si continuamos apoyando la situación social que básicamente es injusta, independientemente de las convicciones personales o racionalizaciones que se hagan por parte de sus simpatizantes.

En su elección por mantener esta situación, nuestro gobierno esta fracasando en su apreciación política y su sensibilidad moral. Espero que nuestro Presidente y el Departamento de Estado cambien, a raíz de los recientes acontecimientos en San Salvador para honrar póstumamente el pedido hecho por Monseñor Romero.

James L. Connor, S. J. (Presidente de la conferencia Jesuita, Washington, D.C.).

